



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

18786/2025 PBB POLISUR SRL c/ EN-ARCA s/MEDIDA CAUTELAR
(AUTONOMA)

Buenos Aires, 16 de octubre de 2025.- SH

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional – ARCA DGI a fs. 159, contra la resolución de fs. 126, fundado por el memorial de fs. 170/186, cuyo traslado, conferido a fs. 187, fuera replicado por la parte actora a fs. 188/203. El recurso de apelación deducido, a fs. 150/153, por la demandada -en subsidio de la revocatoria- contra el auto de fs. 149, contestado a fs. 165/169.

Asimismo, el “hecho nuevo” denunciado por la parte actora a fs. 205/207 y lo manifestado en las presentaciones electrónicas de fs. 213, 216/218 por la accionada; y,

CONSIDERANDO:

I.- Que, por la resolución del 19 de junio del corriente año, el señor juez de primera instancia admitió la medida cautelar solicitada por la empresa PBB Polisur SRL y, por consiguiente, ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a que se abstenga de emitir boleta de deuda, iniciar procesos de ejecución fiscal, solicitar la traba de medidas cautelares, embargos o inhibiciones generales, y realizar cualquier acto tendiente a hacer efectivo el cobro de la deuda correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales, Acciones y Participaciones Societarias (período fiscal 2024); como así también de inhabilitar, bloquear, rechazar, no renovar o impedir la emisión del Certificado de Cumplimiento Fiscal, o certificados de retención en IVA o Impuesto a las Ganancias, o rechazar reintegros fiscales, e incorporar la citada deuda en los sistemas web de “Cuentas Tributarias”; además de inhabilitar a la actora a que opere en el marco del Sistema Malvina o en cualquier otro registro aduanero a fin de no obstaculizar sus operaciones de comercio exterior, hasta tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa con fecha 23/05/25, en los términos del art. 74, del Decreto N° 1397/79.

Fijó caución real por la suma de \$746.573.973,28, por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiese

Fecha de firma: 16/10/2025

Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SUSANA MARIA MELLID, SECRETARIA DE CAMARA



#40069431#476085267#20251015152532077

ocasionar, en los términos del art. 10 de la ley 26.854, la cual fue prestada mediante la póliza de seguro de caución a fs. 137/141 (cfr. fs. 142).

Para así decidir, tuvo por acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por parte actora, en función de los precedentes del fuero y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se reconoció la posibilidad de los responsables sustitutos de compensar las deudas asumidas en tal calidad con créditos fiscales a su favor.

En cuanto al peligro en la demora, ponderó las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada y los graves efectos patrimoniales que podría traer aparejado. A su vez, recordó que los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor peligro en la demora puede atemperarse el rigor acerca del *fumus boni iuris* y viceversa, siempre, claro está, de que ambos recaudos se hallen presentes.

Además, expuso que la medida cautelar peticionada no causa efectos jurídicos o materiales irreversibles, debido a que, la demandada podrá reclamar los importes adeudados, cuyo cumplimiento se asegurará mediante la caución correspondiente.

Puntualizó que el mantenimiento de la suspensión dispuesta por la medida cautelar otorgada depende del propio accionar y diligencia de la demandada, pues aquélla es concedida hasta que se dicte la resolución administrativa que cause estado, como respuesta al recurso interpuesto por la accionante.

Indicó que no se observa que su concesión pueda constituirse, *prima facie*, como una afectación valorable al interés público.

II.- Que el Fisco Nacional, ARCA-DGI, en sustento de su recurso expresa los agravios que la resolución apelada le causan. Cuestiona que se haya concedido la medida cautelar sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

18786/2025 PBB POLISUR SRL c/ EN-ARCA s/MEDIDA CAUTELAR
(AUTONOMA)

de la Ley N° 26.854, omitiendo el análisis adecuado de las disposiciones aplicables al caso.

Sostiene, en primer término, que no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la actora, ya que el a quo omite ponderar que la Resolución General AFIP N° 3175/11, dictada en cumplimiento del precedente “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, regula de modo expreso el régimen de compensaciones tributarias y que la denegatoria de la compensación efectuada por el Organismo fue dictada conforme a derecho. Reprocha al sentenciante haber soslayado la aplicación de dicha normativa y haber realizado un análisis superficial.

En segundo lugar, sostiene que no se configura el peligro en la demora, requisito indispensable para la procedencia de toda cautelar. Indica que la actora no acreditó perjuicio económico alguno derivado del pago del tributo ni afectación a su desenvolvimiento normal, y que la medida apelada le otorga un beneficio no previsto en la ley, contrariando el principio de interpretación restrictiva de las exenciones y beneficios impositivos.

Asimismo, aduce que la medida cautelar afecta el interés público y una función esencial del Estado, cual es la recaudación tributaria. Argumenta que el decisorio impone a la AFIP actuar en contradicción con la normativa vigente, vulnerando el principio de división de poderes y los artículos 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 9 de la Ley N° 26.854, que prohíben dictar medidas cautelares que obstaculicen los recursos del Estado.

Alega además que el fallo resulta arbitrario, por haber prescindido del análisis de las normas aplicables y de los argumentos expuestos en el informe previsto en el artículo 4 de la Ley N° 26.854, fundando su decisión en afirmaciones dogmáticas sin demostrar el razonamiento lógico-jurídico que justifique la medida



concedida. Puntualmente, se queja de la falta de análisis de la Resolución General N° 3175/11 que resulta de aplicación al presente caso.

Invoca jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, que en casos análogos ha denegado medidas cautelares destinadas a suspender la aplicación de la Resolución General N° 3175/11, al considerar que la valoración sobre su validez corresponde al dictado de la sentencia definitiva y que no se configura el peligro en la demora cuando el pago del tributo no afecta la solvencia ni continuidad de la empresa.

Finalmente, formula reserva de caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.

III.- Que en torno al cumplimiento de la medida cautelar y al efecto con el que fuera concedido el recurso de apelación, se generó una incidencia, dado que la actora, luego de haber prestado la caución, a fs. 143/148 denunció su incumplimiento, lo cual condujo a que el juez intime a la demandada, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (cfr. [fs. 149](#)).

En tales circunstancias, el organismo fiscal interpuso un recurso de revocatoria, con apelación en subsidio (sólo este último concedido a [fs. 160](#)) en el que rechaza las acusaciones de incumplimiento de la medida, calificándolas de falaces y temerarias. Afirma que no se ha negado a cumplir la orden judicial, y que las afirmaciones de la actora, junto con la validación del juez, vulneran el derecho de defensa y la seguridad jurídica, ya que aún corren los plazos procesales para apelar la medida conforme al artículo 13 de la Ley 26.854.

Invoca dicha norma para sostener que el recurso de apelación contra una medida cautelar que suspende un acto estatal debe concederse con efecto suspensivo, por lo que consideró prematura la intimación cursada por la actora. Aclara, además, que no se verifican los supuestos del artículo 2 inciso 2 de la ley citada que justificarían una excepción, poniendo de relieve que, al estar en juego





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

18786/2025 PBB POLISUR SRL c/ EN-ARCA s/MEDIDA CAUTELAR
(AUTONOMA)

la recaudación pública, debe aplicarse un criterio riguroso antes de suspender la ejecución de actos administrativos, dada la presunción de legitimidad de los mismos y el interés público comprometido

Solicita que se revoque la providencia recurrida, dejando sin efecto la intimación del 04/07/2025, se aplique el art. 13, inc. 3, de la Ley 26.854, reconociendo el efecto suspensivo del recurso, se ordene a la actora abstenerse de realizar llamadas telefónicas y limitar sus manifestaciones al expediente.

Cabe tener presente, que en el sistema informático se encuentra vinculado a estas actuaciones el recurso de queja interpuesto por el ARCA contra el auto del 10/07/25, que concede en relación y con efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar (cfr. 18786/2025 Recurso Queja N° 1 - PBB Polisur SRL c/EN-ARCA s/medida cautelar (autónoma)”, el cual se resuelve en el día de la fecha).

IV.- Que, con todo, la parte actora denuncia, como hecho nuevo, la publicación de la Resolución General AFIP N° 5753/2025 (B.O. 05/09/2025), mediante la cual el organismo reconoce la viabilidad de la compensación efectuada por responsables sustitutos con saldos de libre disponibilidad propios.

Destaca que el artículo 1° de la citada norma autoriza expresamente a los contribuyentes y responsables sustitutos —conforme a los artículos 5° y 6°, inciso 2°, de la Ley N° 11.683— a solicitar la compensación de sus obligaciones fiscales determinadas y exigibles, aun cuando correspondan a distintos impuestos.

Asimismo, explica que el artículo 7° de dicha resolución abroga las Resoluciones Generales Nros. 1658, 3175, 4334 y 4521, que constituían el obstáculo normativo para que los responsables sustitutos pudieran compensar automáticamente sus obligaciones mediante la plataforma de la AFIP.



En consecuencia, señala que la compensación que motivó la medida cautelar ahora se encuentra expresamente admitida por la nueva reglamentación, y solicita que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se allane a la pretensión.

De su lado, a [fs. 213](#), el Fisco Nacional manifestó que “corresponde declarar abstracta la medida cautelar dictada en autos, instando a la empresa a re adecuar su pedido en el marco de lo estipulado por la nueva normativa”.

V.- Que, por el despacho de [fs. 215](#), el Sr. Juez intimó a la ARCA a que manifieste si la presentación realizada con fecha 15/09/25 importa un desistimiento del recurso de apelación interpuesto con fecha 07/07/25.

El organismo, a [fs. 216/218](#) manifiesta que no desiste del recurso de apelación interpuesto el 07/07/2025, aunque considera que la medida cautelar autónoma ha devenido abstracta debido al cambio normativo introducido por la Resolución General (AFIP) 5753/2025.

Explica que, si bien la actora solicitó que el organismo se allanara a su pretensión alegando que la compensación ya estaba autorizada por la nueva normativa, la División Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales informó que aún mantiene la deuda por el Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones y Participaciones.

Aclara que, en cumplimiento de la medida cautelar, el sistema “ocultó” la deuda, pero no se produjo una compensación efectiva ni aceptación por parte de ARCA, y que la actora no adecuó su solicitud a los términos de la nueva resolución.

Subraya que ARCA no realiza compensaciones ni determina el origen y destino de los pagos, siendo el contribuyente quien debe hacerlo conforme a la RG 5753, que reemplazó la RG 1658.

En consecuencia, sostiene que el dictado de la RG 5753 modificó el marco jurídico del proceso, haciendo abstracto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

18786/2025 PBB POLISUR SRL c/ EN-ARCA s/MEDIDA CAUTELAR
(AUTONOMA)

el objeto de la cautelar, ya que la actora puede ahora compensar libremente sus obligaciones sin necesidad de mantener la medida.

VI.- Que, en las condiciones enunciadas, debe recordarse que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las sentencias deben atender a la situación existente al momento de la decisión (Fallos: 216:147; 243:146; 244:298; 259:76; 267:499; 298:33; 304:1649; 311:870, 312:555, entre otros), de modo que, resulta evidente que a raíz del dictado de la RG 5753/2025 -B.O. 5/09/2025- no subsiste en el sub examine una disputa actual y concreta entre las partes que configure un “caso” susceptible de ser sometido a los jueces (conf. CSJN, Fallos: 328:2440 y sus citas).

Por lo tanto, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, puesto que, precisamente, las circunstancias sobrevinientes al recurso de apelación interpuesto por la parte el Fisco Nacional son determinantes de lo inoficioso de dilucidar la pretensión cautelar articulada en la presente (arg. C.S.J.N. doctrina de Fallos: 276:207; 278:357; 279:30 y 302:721), en tanto a este Tribunal le está vedado expedirse sobre planteos que han devenido abstractos (cfr. esta Sala, (cfr. esta Sala, in re, exptes. Nros. 38821/2022 “Minera Minimalu SA c/EN-AFIP-DGI-Expte 1043349/22 s/medida cautelar (autónoma)”, del 10/11/2022, y 57617/2022 “Oilstone Energía SA c/EN-AFIP-resol 5248/22 s/medida cautelar (autónoma)”, del 7/03/2023; CAF 39624/2023/CA001 “Parque Eólico Loma Blanca Ii Sa c/ EN-AFIP-RESOL 5391/23 s/medida cautelar (autónoma)”, [del 28/05/2024](#)).

VII.- Que lo propio resulta predicable respecto de la apelación interpuesta a fs. 150/153, por la demandada -en subsidio de la revocatoria- contra el auto de fs. 149, cuestión que también ha devenido abstracta.

VIII.- Que, en atención a que el modo en que se decide determina la inexistencia de parte vencida, las costas de Alzada deben ser impuestas por su orden, en virtud de lo normado por el art. 68, segundo párrafo, del CPCC (cfr. esta Sala, expte. N°



25698/2012, in re “Intek SA c/EN-Mº Economía-Resol 485/05 (INVOICE LV-024A/12) s/Medida cautelar (autónoma)”, del 11/04/2013; expte. Nº 10160/2021 Pertek SRL c/EN-BCRA -Comunicaciones A7030 A7068 A7151 s/medida cautelar autónoma”, del 3/11/2022; expte. nro. 26477/2025, in re “Verisure Argentina Monitoreo De Alarmas SA c/ EN-ARCA-resol 3175/11 s/proceso de conocimiento”, [del 7/10/2025](#)).

Por ello, **SE RESUELVE:** declarar abstracta la cuestión introducida en los recursos de apelación interpuestos por el Fisco Nacional AFIP – DGI a fs. 159 y fs. 150/153, contra la medida cautelar de fs. 126 y contra el auto de fs. 149, respectivamente. Con costas por su orden (cfme. arts. 68, primer párrafo, y 69 del CPCCN).

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN

